

Santiago, veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, salvo los considerandos cuarto a octavo, que se eliminan.

Y teniendo en su lugar y, además, presente

1º) Que, esta Corte ha sostenido que la acción de amparo, en cuanto persigue resguardar el cumplimiento de la Constitución y las leyes en lo concerniente a la privación, perturbación o amenaza en el derecho a la libertad personal y seguridad individual, es también un instrumento eficaz para el control de las resoluciones que emitan los tribunales de justicia que pongan en riesgo dicha garantía. Surge el recurso de amparo entonces, como el remedio adecuado y oportuno para poner fin a los actos y decisiones que afecten tales derechos, cuando en dichos dictámenes aparezca de manifiesto y sea ostensible que los antecedentes que le sirven de fundamento no se corresponden con el ordenamiento jurídico vigente. Confirma este aserto, lo dispuesto en el artículo 95 Párrafo 4º del Título IV del Libro I del Estatuto Procesal Penal, que, al regular el amparo ante el juez de garantía, dispone que: si la privación de libertad hubiere sido ordenada por resolución judicial, su legalidad sólo podrá impugnarse por los medios procesales que correspondan ante el tribunal que la hubiere dictado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de la República. De modo tal que la presente vía constitucional siempre resulta procedente, cuando se afecte la libertad personal.

2º) Que, del mérito de estos antecedentes, aparece que la recurrida por resolución de 28 de febrero de 2024 declaró inadmisibile el recurso de nulidad de conformidad a lo dispuesto en el artículo 387 del Código Procesal Penal,



recurso que fue interpuesto en contra de la segunda sentencia condenatoria dictada con ocasión del nuevo juicio realizado como consecuencia de la anulación del primero, en el que se recalifica el delito imputado y se aumenta, en consecuencia, la pena impuesta en contra del condenado. De la resolución que declaró inadmisibile el recurso la defensa repuso, rechazándose el recurso por estimar los sentenciadores que la norma del artículo 387 del Código Procesal Penal lo impide.

3º) Que, frente a lo resuelto, es posible advertir que se ha impedido a la defensa impugnar la nueva sentencia condenatoria, lo que podría afectar, el denominado derecho al recurso, entendiendo por tal, el reconocimiento a las partes e intervinientes de la facultad para poder impugnar las sentencias de fondo que le agravian, a través de un recurso que permita la revisión del enjuiciamiento de instancia y asegure un conocimiento adecuado o correspondiente a su objeto.

Este derecho al recurso, en principio formaría parte de la garantía a un justo y racional procedimiento reconocida en el artículo 19 N° 3, inciso 6°, de la Constitución Política de la República, sin perjuicio de que se consagra directamente en los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.2 letra h) de la Convención Americana de Derechos Humanos, que también integran el ordenamiento constitucional chileno por disposición del artículo 5, inciso 2° de la Carta Fundamental.

4º) Que, en el presente caso, como ha sido expuesto, este derecho al recurso se ha visto amagado, ya que, con la interpretación y alcance que se le da a disposición en cuestión por parte del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, se ha impedido a la defensa el acceso a la revisión de la nueva



sentencia y ello pese a que esa parte no recurrió de la primera sentencia condenatoria y la segunda fue considerablemente más gravosa a su respecto. En efecto, el imputado fue condenado el 16 de septiembre de 2023 a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, como autor del delito de hurto descrito en el artículo 446 N° 2 en relación con el artículo 432, ambos del Código Penal, recurriendo de nulidad en contra de la sentencia solo el Ministerio Público. Dicho recurso fue acogido, por lo que la sentencia y su juicio oral fueron anulados por la Corte de Apelaciones de Concepción. Posteriormente, el 17 de febrero de 2024, el sentenciado Pinto Carrasco fue condenado a la pena de 7 años y 183 días de presidio mayor en su grado mínimo como autor, ahora, del delito de Robo con fuerza en lugar habitado.

5°) Que, debemos tener presente el artículo 10 del Código Procesal Penal, que se refiere a la denominada cautela de garantía, en donde expresamente se les reconoce eficacia directa a las garantías judiciales de la Constitución y los tratados internacionales.

A su vez el artículo 4° del Código adjetivo, se refiere a la presunción de inocencia y, concretamente, al trato de inocencia. Dice que *“Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme”*, poniendo de relieve que la presunción cede sólo ante la irrevocabilidad de la decisión de condena, a la que se arriba únicamente en el momento de la firmeza. Tal declaración de certeza parte del supuesto que el proceso se ha de estructurar sobre la base de la existencia de recursos contra la sentencia definitiva, de modo que la presunción opera incluso respecto de ella (de la sentencia definitiva), en el entendido que el imputado aun condenado puede todavía obstaculizar el directo efecto de irrevocabilidad de la sentencia a través de un recurso en su contra. Esto además enlaza con la



defensa y las garantías procesales reconocidas al imputado en el artículo 7° del Código Procesal Penal, desde la primera actuación y a lo largo de todo el proceso penal hasta la completa ejecución de la sentencia (imputado-condenado), con lo cual todas esas garantías -las de la Constitución incluidas- son acervo jurídico para el imputado durante todas las fases del procedimiento, alcanzando entonces al debido proceso y en él al derecho al recurso.

6°) Que, por otra parte, y como más arriba se indicó, debemos tener presente la normativa internacional sobre la materia, específicamente el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que señala *“5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”*.

Por otra parte, el artículo 8.2 letra h) Convención Americana de Derechos Humanos señala, *“Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: “h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”*.

7°) Que, en el caso en estudio, no está discutido que la defensa no recurrió de nulidad de la primera sentencia condenatoria, conformándose con ella. Lo anterior es relevante, ya que conforme a las normas de la Convención y del Pacto, citadas anteriormente, el derecho a recurrir de la sentencia se reconoce a un imputado o condenado, que en el presente caso, no lo ha podido ejercer además en ninguna oportunidad, ya que respecto de la primera sentencia recurrió el Ministerio Público y de la segunda sentencia condenatoria, el recurso de nulidad presentado por la defensa, se declaró inadmisibile.



Conforme se ha venido razonando, el recurso contra la decisión condenatoria penal es una garantía que cede en favor del acusado y que, por ende –según su naturaleza- no le obliga a recurrir; por lo que no puede considerarse que si de una primera sentencia, que estima que no le agravia, decide legítimamente no recurrir, no pueda luego hacerlo respecto de la segunda condena, que sí le resulta más gravosa.

8º) Que, debemos tener presente además que, el artículo 387 del Código Procesal Penal en su inciso segundo, establece una regla de excepción a la denominada regla de clausura, ya que permite la interposición de un nuevo recurso de nulidad en el evento que la primera sentencia haya sido absolutoria. De manera que la regla que subyace a la literalidad de la norma y es plenamente compatible de entender, el derecho al recurso como garantía del debido proceso, subsiste, en tanto la segunda condena sea más gravosa que la primera, tal como aconteció en la especie.

9º) Que, esta lectura del artículo 387 del Código Procesal Penal se aviene más a lo dispuesto en el artículo 8.2 letra h) de la Convención Americana de Derechos Humanos, en los términos que lo ha entendido sostenidamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, norma e interpretación que debe ser considerada e integrada por esta Corte en la interpretación y aplicación de la norma legal interna, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5º de la Constitución Política de la República y la propia Convención Americana ya citada.

En este sentido, la Corte Interamericana ha sostenido, siguiendo su propia jurisprudencia, *“que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o*



tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. La doble conformidad judicial, expresada mediante el acceso a un recurso que otorgue la posibilidad de una revisión íntegra del fallo condenatorio, confirma el fundamento y otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado, y al mismo tiempo brinda mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado. Asimismo, la Corte ha indicado que, lo importante es que el recurso garantice la posibilidad de un examen integral de la decisión recurrida”. Y luego añade: “El derecho de impugnar el fallo busca proteger el derecho de defensa, en la medida en que otorga la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión adoptada en un procedimiento viciado y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona” (Caso “Mohamed vs. Argentina”, Sentencia de 23 de noviembre de 2012, párrafos 97 y 98).

Este criterio ha sido confirmado en época posterior, analizando precisamente la regulación dispuesta en el Código Procesal Penal chileno, señalando que *“el alcance y el contenido del derecho de recurrir del fallo han sido precisados en numerosos casos resueltos por esta Corte. En general, ha determinado que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. Toda persona sometida a una investigación y proceso penal debe ser protegida en las distintas etapas del proceso, que abarca la investigación, acusación, juzgamiento y condena”* (Caso Norín Catrimán y otros vs Chile”, Sentencia de 29 de mayo de 2014, párrafo 269).

10°) Que, conforme se viene razonando la interpretación que hicieron los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción al alcance del



artículo 387 del Código Procesal Penal, deviene en ilegal, ya que con ella restringen la posibilidad que la defensa pueda pedir la revisión del fallo conculcando el derecho de defensa y consecuentemente el debido proceso.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, **se revoca** la sentencia apelada de ocho de marzo de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, en el Ingreso Corte N° 111-2024 y, en su lugar se **acoge** el recurso de amparo interpuesto a favor de **Javier Enrique Pinto Carrasco**, declarando que se deja sin efecto la resolución del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción que rechazó la reposición en contra de resolución que con fecha veintiocho de febrero declaró inadmisibile el Recurso de Nulidad en contra de la sentencia definitiva de fecha diecisiete de febrero de 2024 y consecuentemente este debe ser estimado admisible por el tribunal recurrido.

Se previene que el Ministro Sr. Llanos tiene además presente, para estimar la presente acción constitucional de amparo, lo siguiente:

I.- Que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos tiene una especial naturaleza, dado su carácter *pro homine* y con efectos *erga homnes*, siendo por definición supranacional y de carácter imperativo, teniendo sus principios primacía por sobre las normas del derecho internacional general. Sin embargo, este último aporta como principio, para reconocer su primacía, la imposibilidad de alegar el derecho interno para incumplir las obligaciones convencionales internacionales (Art.27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados);

II.- Que la jerarquía supranacional del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha sido reconocido expresamente en nuestro ordenamiento jurídico por el inciso 2° del Art.5° de la Carta Fundamental, en



cuanto establece: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”;

III.- Que conforme a lo antes dicho, el Estado de Chile se encuentra limitado por el respeto de los valores y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en especial, por el que ha sido establecido por el Sistema Interamericano sobre la materia; de tal modo que los Tribunales de Justicia, en cuanto órganos estatales, tienen el deber de efectuar un control de convencionalidad como ejercicio hermenéutico, cuyo fin es hacer efectivos los derechos consagrados convencionalmente. De este modo, toda norma de derecho interno contraria a los tratados antes referidos no genera efectos, al ser incompatible con las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Chile. Así ha sido consagrado, por los demás, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros fallos, en “Almonacid Arellano c. Chile” (2006) y “Cabrera García y Montiel Flores c. México”(2010), que han señalado: “Cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar porque los efectos de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin.”

IV.- Que el derecho al recurso en contra de una sentencia condenatoria es un derecho fundamental de carácter procesal, previsto expresamente – como se ha expresado previamente- en tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, esto es, el Pacto Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos;



V.- Que en virtud de lo antes expuesto, este previniente de opinión que la regla del inciso segundo del Art. 387 del Código Procesal Penal, que veda al condenado en un juicio oral sustanciado como consecuencia de haber sido anulada una primera condena en su contra y el juicio que le antecedió, es contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos en su vertiente de derechos procesales o garantías de juzgamiento y que, por tanto, no puede producir el efecto de impedir el ejercicio del recurso por el condenado en el nuevo juicio.

Es preciso señalar que el recurso de nulidad (como su nombre lo indica) debe enmarcarse en la doctrina de la nulidad procesal, siendo uno de los instrumentos para hacerla efectiva (junto con la casación en la forma civil y el incidente de nulidad procesal). Se ha dicho al respecto que la finalidad de la nulidad procesal "...es restarle valor a la actuación viciada, tenerla como no sucedida, ya que no constituye el medio idóneo destinado al fin para la que fue prevista por el legislador...la justificación de la nulidad procesal (es) que a través de ella se resguarda la garantía constitucional del llamado 'debido proceso'."(Julio Salas Vivaldi, "Los incidentes y en especial el de nulidad procesal", pag.91, Ed. Jurídica de Chile, 1989). Así las cosas, en la especie el nuevo juicio constituyó en rigor el primer juicio incoado en contra del amparado, puesto que el primero no fue válido, y en consecuencia la sentencia puede ser impugnada por la vía ya señalada, en ejercicio del derecho fundamental antes expresado. En tal virtud, y entendiendo que al anularse el juicio primitivo este no ha acontecido o sucedido, igualmente el encausado puede recurrir de la sentencia condenatoria del segundo juicio aún cuando él hubiese impetrado la nulidad del primero (lo que no es la situación de la especie), puesto que si el nuevo juicio reitera vicios que afecten derechos constitucionales, siempre el



condenado tiene derecho al recurso, sin que pueda establecerse una regla de clausura al efecto.

Se previene por el Ministro Sr. Valderrama y la Ministra Sra. Gajardo que no comparten el considerando 9°) del presente fallo.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 36.130-2024.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., la Ministra Sra. María Cristina Gajardo H., el Ministro Suplente Sr. Roberto Contreras O., y el Abogado Integrante Sr. Juan Carlos Ferrada B. No firma el Abogado Integrante Sr. Ferrada, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.



QVGZXPXXBEX

En Santiago, a veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

